

LA semana política de A.L.

MARCOS KAPLAN

UNAM

La embajadora de EU en América Latina, Jeanne Kirkpatrick declara en la capital de Chile, que usarán todos los medios económicos y militares a su alcance para detener la influencia de la Unión Soviética y de Cuba en Centroamérica y el Caribe, cuya situación no se resolverá de inmediato de acuerdo a los intereses y expectativas norteamericanos. La embajadora agregó que las experiencias de los regímenes militares del Cono Sur, para enfrentar las influencias soviético-cubanas son válidos para Centroamérica y el Caribe, y se les podría pedir una colaboración más específica en el futuro. Estas declaraciones reflejan, sobre todo, el creciente acercamiento de EU a la dictadura pinochetista, interesada en asumir el papel de aliado confiable de aquellos en la cruzada antipopular y antirrevolucionaria de la región. Ello parecería permitir a Chile, entre otros objetivos, un refuerzo de su posición en la negociación con Argentina, en el diferendo limítrofe y marítimo.

La normalización de relaciones entre EU y Argentina sigue dificultada por lo que los primeros consideran como insuficiente definición de la segunda en el enfrentamiento de bloques, en especial las excelentes relaciones comerciales con la URSS. A ello se agrega la resistencia de Argentina a la firma del Tratado de Tlatelolco sobre armas nucleares, y la falta de reafirmación de los derechos humanos, como escándalo Internacional. La convergencia multipartidaria sigue esperando mayores definiciones del proceso de apertura democrática, por parte del gobierno del general Viola que, a su vez, no abandona la posibilidad de promover su propia convocatoria política. La mera posibilidad y la realización efectiva de una apertura política, sigue encontrando obstáculos en la política económica aplicada desde 1976 y sus consecuencias, y en la candente cuestión de los desaparecidos y de la represión en general, así como en la desconfianza y resistencia de los sectores duros de las fuerzas armadas y de la derecha económica. La problemática de la apertura democrática es compartida por todos los países del cono sur. En Uruguay se esboza y debate el plan político-militar, por el cual, desde septiembre de 1981 a noviembre de 1984, se iría dando el funcionamiento de los partidos, la integración de una asamblea constituyente, la convocatoria a plebiscito y a elecciones generales, en todo caso con la participación de las fuerzas armadas en el Gobierno, especialmente a través del Consejo de Seguridad Nacional. La renuncia del general Golbery do Couto e Silva, jefe de la casa civil y cerebro del Gobierno del Brasil, realimenta las deudas sobre la continuidad de la democratización y constituye la más grave crisis política desde 1964, que se entrelaza con el avance de la recesión y el desempleo. No se da aún el acuerdo entre la junta de comandantes de Bolivia y jefes militares de la reciente rebelión, y la situación decepciona a los partidarios de aquella, y refuerza las críticas de la oposición.

La ola de huelgas en el Perú es denunciada como factor de desestabilización política, por el presidente Belaúnde, jaqueado además por las críticas a los acuerdos petroleros con transnacionales, el auge de un terrorismo misterioso, la desconfianza de las fuerzas armadas y el descontento de sectores empresarios.

El presidente Royo, de Panamá, busca preservar la continuidad del régimen torrijista, apoyado en el Gobierno, la Guardia Nacional y el Partido Revolucionario Democrático, frente al endurecimiento de los partidos opositores y su búsqueda de una estrategia común para una nueva institucionalización. En una Centroamérica afectada por la desastrosa recesión, El Salvador entra en una nueva fase de caos económico, equilibrio militar relativo entre el Gobierno y las guerrillas, y mayores presiones del Gobierno norteamericano en favor de una victoria armada como prerequisite de nuevas elecciones.